56

"El Rey. Por quanto estando mandado por ordenan-
"zas y Leyes de Indias y con especialidad por la 8a., Li-
"bro 3º de la recopilación de ellas, que a las nuevas re-
"ducciones y pueblos que se forman de indios se le dé si-
"tio que tenga comodidad de aguas, tierras, montes, sali-
"das y entradas, para que hagan sus labranzas y un ejido
"de una legua, donde pacen sus ganados, sin que puedan re-
"volverse con los de los españoles; se me ha informado se
"falta enteramente a esta disposición en todas las Misio-
"nes de Nueva España, pues Gobernadores y Encomenderos,-
"no sólo no les dan tierras a los indios para que formen -
"sus pueblos, sino que si las tienen, se las quitan con -
"violencia, vendiéndoles sus hijos como esclavos, y trayen-
"do sus mujeres a sus casas a que les sirvan empleándolas
"en hilar, tejer y labar, sin pagarles su trabajo, con -
"que se aniquilan los pueblos que se han fundado, a costa
"de los grandes trabajos de los misioneros, siendo motivo
"de que no puedan administrarlos ni enseñarles la doctri-
"na, ni consiguientemente formarles pueblos de los muchos
"que se hicieron en las nuevas conversiones, si los Gober-
"nadores y encomenderos atendieran al cumplimiento de la -
"expresada ley y obligación de su empleo y no al de sus -
"propios intereses. Por tanto, por la presente mando a -
"mi Virrey de la Nueva España, Audiencias y Gobernadores -
"de ella que, en la inteligencia del desagrado que me han
"causado estas noticias, cuiden en lo de adelante del re-

57

"Medio de este tan pernicioso abuso, y castigo de los trans-
"gresores de las expresadas Leyes, y que en conformidad y ob-
"servancia de ellas pongan todo su mayor desvelo y eficacia
"en que se dé a los referidos indios recién convertidos las
"tierras, ejidos y aguas que les están concedidas, y que --
"por ningún motivo se puedan valer de ellos, ni de los hi--
"jos, de mujeres, para el servicio personal, sino que sea -
"voluntario en ellos y pagándoles el jornal que fuere estilo,
"por convenir así al servicio de Dios y mío, teniendo enten-
"dido que de lo contrario pasaré a tomar severa resolución.
"Y del recibo de este despacho, y de haberse hecho notorio
"para su cumplimiento en las partes que convenga, y de lo -
"que resultare de las providencias que aplicaren, me darán
"cuenta en la primera ocasión que se ofrezca para hallarme
"enterado. Fecho en Madrid a quince de octubre de mil sete-
"cientos trece.- Yo el Rey.- Por mandato del Rey Nuestro Se-
"ñor, D. Diego de Morales Velasco." Señalado con el sello -
"correspondiente y con tres rúbricas."

La situación para los pobres indios, lejos de me-
jorar con la independencia, empeoró, porque ésta —como di-
ce un distinguido historiador— emancipó a México de la Co-
rona de España, pero no de los españoles que estaban arrai-
gados fuertemente a estas tierras, después de tres siglos -
de ejercer sobre ellas una dominación absoluta. Durante el
período de vida independiente, en efecto, a tan triste si-
tuación se sumaron todos los males derivados de las guerras

extranjerías y de las continuas luchas intestinas de clases; mas, como si esto no hubiere sido bastante, la Constitución Federal de 1857, al prohibir a las corporaciones civiles y eclesiásticas adquirir o administrar bienes raíces, provocó el fraccionamiento de los ejidos y de los bienes comunales, con notorio perjuicio de los poblados indígenas, y, para coronar dignamente esa montaña secular de dolores y miserias, al amparo de la Dictadura del General Díaz —que sistemáticamente favoreció los intereses de la insignificante minoría dominadora en detrimento de los de la inmensa mayoría dominada— se produjo la absorción total de la pequeña propiedad por los grandes latifundios.

"Viene la cuestión agraria, por consiguiente, — desde hace cuatro siglos, incubando muchos rencores y muchos odios y ahondando con ellos, cada vez más, el abismo que se para a las clases privilegiada y popular. No es de extrañar, por tanto, que de todas las tendencias que se manifestaron al estallar el último movimiento revolucionario, la reivindicadora DE TIERRAS —expresada en el Decreto de 6 de enero de 1915, que provee lo necesario para la restitución de ejidos y de bienes comunales— haya sido la más persistente y vigorosa manteniendo siempre encendido el foco de la rebelión y llevando su impulso revolucionario y radical más allá del período de la lucha armada, hasta el momento en que al actual Gobierno le fué dable moderar ese impulso y, mediante la reciente reorganización de las Comisio-

nes Agrarias y una reglamentación adecuada, orientarlo hacia la legalidad.

"Si es cierto, pues, que los procedimientos por los cuales se ha hecho la dotación y la restitución de ejidos han participado, en general, de las asperezas inherentes al empuje revolucionario que los engendró y en algunas ocasiones —preciso es confesarlo— hasta en forma un tanto ilegal, haciendo así más lamentables los daños producidos en las grandes propiedades afectadas, también es cierto que todo eso, satisfaciendo de modo expedito un anhelo popular siempre contrariado, contribuyó a restablecer la paz y que, en la consolidación definitiva de ésta, jugará un papel muy importante la completa solución del problema agrario, mediante procedimientos estrictamente legales y suavizados por un amplio espíritu de conciliación.

"Se propone este Gobierno, además, tan pronto como lo permitan sus condiciones financieras, redimir los bonos creados por la Ley para indemnizar las expropiaciones de la propiedad privada transformada en ejidal, recibiendo esos bonos en pago de contribuciones capaces de amortizar la deuda agraria en un plazo muy corto o canjeándolos, al contado, por dinero.

"Hay que hacer constar, por último, que las dotaciones y restituciones de ejidos, más que como manifestación de un AGUDO Y AVANZADO BOLSHEVISMO, deberían ser consideradas como la tardía obediencia a una orden justiciera

dictada por el Rey Felipe V en los albores del siglo XVIII.

"Devolución de propiedades incautadas.- Una administración anterior a la actual y reconocida por el Gobierno de los Estados Unidos, incautó los Bancos de Emisión de la República, tomó sus reservas metálicas y las gastó en atenciones del Gobierno. Una de las primeras cosas hechas por la presente administración fué la de restituir los Bancos incautados a sus Consejos Directivos, reconocer las deudas correspondientes --que montan a una suma vecina de sesenta millones de pesos-- y concertar una forma de pago satisfactoria para los interesados, con lo cual se ha cumplido religiosamente hasta ahora.

"Los Ferrocarriles también fueron incautados por la misma administración antes referida. Ha sido ya devuelto el Ferrocarril Mexicano, que es propiedad inglesa. Los otros ferrocarriles no han sido todavía desincautados, porque el deterioro de las construcciones y del material rodante y la indisciplina del personal, ocasionados por la revolución, habrían dificultado considerablemente, primero, la devolución de esas empresas y, posteriormente, su manejo por las respectivas compañías. Pero el actual Gobierno ha tratado de mejorar las condiciones de dichas propiedades y al efecto ha gastado de sus propios recursos, grandes cantidades de dinero. Por lo demás, la deuda resultante de la incautación de los ferrocarriles está pendiente de los arreglos que se están negociando para la reanudación

del servicio de la deuda pública.

"Reanudación del servicio de la deuda.- Suspendido desde el año de 1914 el pago de los intereses y amortización de la deuda exterior, el presente Gobierno, casi a raíz de su inauguración y por conducto de esta Cancillería, invitó a la Casa Spyer de New York y al Comité Internacional de Banqueros, presidido por el señor Lamont, a venir a México con el fin de resolver, de común acuerdo, la mejor forma de reanudar el servicio de dicha deuda. Como los representantes de los tenedores de bonos mexicanos tardaron más de seis meses para decidirse a atender la invitación mencionada, es más culpa de esos representantes que de este Gobierno, el que todavía no se haya llegado al arreglo respectivo.

"Comisiones Mixtas de Reclamaciones.- Aunque según los principios de Derecho Internacional, los Gobiernos no son responsables de los daños producidos en las guerras civiles, y a pesar de que ya estaba funcionando una Comisión Nacional de Reclamaciones por dichos daños, el 21 de julio del año pasado se giró, por la vía cablegráfica y el conducto de nuestras representaciones diplomáticas en el extranjero, una invitación a todos los Gobiernos cuyos nacionales hubieran sufrido daños en sus personas e intereses por causa de la revolución, a fin de que, de acuerdo con el Gobierno de México, se procediera a ce-

lebrar Convenciones para el establecimiento de Comisiones Mixtas que se encargaran de fallar las reclamaciones de sus nacionales. En el caso del Gobierno de los Estados Unidos, además, hay la circunstancia de habersele propuesto, desde fines del año pasado, los proyectos de dos Convenciones: una para crear la Comisión Mixta que resolviera las reclamaciones por daños originados de la revolución y la otra para establecer la que fallara las demás reclamaciones pendientes entre los dos países, que quedaran fuera de la jurisdicción de la Comisión Mixta anterior. Cualesquiera que sean las razones por las cuales el Gobierno de los Estados Unidos haya pospuesto la consideración especial de dichas Convenciones, el Gobierno de México no es responsable de tal aplazamiento ni puede señalar la fecha en que las Comisiones Mixtas vayan a comenzar sus labores.

&

& &

"Creo que los casos concretos anteriores bastan, por una parte, para ilustrar la política de este Gobierno respecto de las inversiones presentes y futuras de capital extranjero en México, tal como fué definida al principio de esta exposición, esto es, de respeto absoluto a los derechos legalmente adquiridos y, por otra parte, para poner de relieve la constancia y la energía con que el actual --

63

Primer Magistrado de la Nación está tratando de desarrollar esa política, cuyos resultados, aunque modestos, quizá́s toquen los límites de lo que humanamente puede exigírsele, dados el número y la magnitud de las dificultades engendradas por una revolución que ha durado más de diez años y que ha conmovido hasta el último rincón de la República y la anómala situación internacional que aumenta e intensifica dichas dificultades."

Contestación americana a las notas
del 4 y 24 de mayo de 1922.

No fué sino hasta el día 3 del mes de agosto de 1922 cuando recibió esta Secretaría la contestación a sus dos últimas notas, con el envío, en ~~brevisima~~ carta del Encargado de Negocios de los Estados Unidos, de una copia exacta de las instrucciones que, al efecto, le giró el propio Secretario de Estado Honorable Charles Evans Hughes, con fecha 28 de julio.

"He tardado en contestar las notas extraoficiales del señor Pani, fechadas el 4 y el 24 de mayo de 1922" —comienza así la comunicación del señor Hughes al señor Summerlin— "en espera de medidas adecuadas por parte de las autoridades mexicanas para implantar el programa político y administrativo que el señor Pani ha descrito en términos generales. Como la reglamentación del Artículo 27 de la Constitución de 1917 —que el señor Pani insiste en considerar de la competencia exclusiva del

Congreso Mexicano— no ha sido establecida aún, puede usted, sin esperar más tiempo, replicar extraoficialmente - al señor Pani en el sentido de estas instrucciones."

Sin detenerse en revisar la cuestión relativa a la improcedencia de recibir el reconocimiento por medio - de la firma de un Tratado --ya que se conviene en que la firma de la Convención número 1 de Reclamaciones significaría el reconocimiento implícito del Gobierno de México y la reanudación de las relaciones diplomáticas entre ambos países y que, por tanto, dicha cuestión no radicaría en la práctica del procedimiento, sino simplemente, como siempre lo ha dicho la Cancillería americana, en lo que debiera ser el Tratado o la Convención-- y después de expresar que los propósitos del Tratado no eran más que --otorgar, en forma conveniente y obligatoria, las seguridades con que se ha manifestado acorde el Presidente de México en entrevistas personales y en cartas; de insistir - en la constitucionalidad del Tratado propuesto y de lamentar que no se le hayan contestado los comentarios relativos, ni señalado cualesquier otras disposiciones del Tratado que pudieran considerarse violatorias de la Constitución; después de eso --repito-- la comunicación del señor Hughes al señor Summerlin deduce que "la objeción a dicho Tratado no habrá de hallarse en sus propios términos, los cuales podrían modificarse fácilmente para refutar cualquier objeción de la naturaleza antes indicada, - con tal de que incluyera debidas seguridades contra la -

confiscación, sino en el hecho de que la firma de un Tratado semejante no estaría en armonía con el sentimiento público de México y que, además, el Senado no lo ratificaría."

"Pero si las autoridades mexicanas" —continúan las instrucciones al señor Summerlin— "no celebran un Tratado que obligue a México a respetar los títulos válidos adquiridos según las leyes mexicanas antes de la Constitución de 1917, el punto radica en la manera como habrán de ser otorgadas tales seguridades." Considera apenas cuestionable que debieran otorgarse éstas en alguna forma adecuada, en vista de los procedimientos confiscatorios adoptados a pesar de las promesas explícitas del señor Carranza en la época de su reconocimiento. No intenta examinar las numerosas declaraciones del General Obregón, citadas en la nota del 24 de mayo, en atención a que —como en la misma nota se asienta— el Presidente de la República no está investido de la autoridad necesaria para hacer efectivas sus seguridades, puesto que, por ejemplo, se objeta el propuesto Tratado de Amistad y Comercio, entre otras cosas, porque, "contiene interpretaciones de algunos de los preceptos de la Constitución de 1917, no reglamentados aún por el H. Congreso de la Unión, que es la única autoridad en la que el pueblo mexicano ha delegado sus facultades para ello." Y, ante tal incapacidad del Ejecutivo y sin la menor intención de cuestionar la sinceridad

dad del intento que lo ha guiado en sus declaraciones, - se acoge solamente a la que establece la coincidencia -- substancial entre las demandas americanas y los tópicos - del programa político y administrativo del Gobierno de México, respecto de los intereses extranjeros y procede a - analizar, punto por punto, el contenido de la última nota de nuestra Cancillería, en una extensa y franca exposición, frecuentemente ilustrada con los casos en que, no obstante los manifiestos buenos propósitos de las autoridades - mexicanas, se ha atentado contra los derechos legítimos - de los ciudadanos o empresas de los Estados Unidos, exposición que termina expresando que:

"En cuanto a las Convenciones propuestas -- como ya lo he dicho -- tendríamos ciertas sugerencias que presentar en lo que toca a su tenor y alcance, tan pronto como queden arregladas convenientemente las cuestiones -- fundamentales a que me refiero, y considero que no habría gran dificultad para lograr mutuas conclusiones satisfactorias respecto de estas Convenciones."

Concluye, finalmente, la nota de instrucciones - al Encargado de Negocios americano, con el siguiente resumen de la situación tocante a derechos de propiedad:

"(1) Al parecer, se han estado entablando negociaciones tendientes a un arreglo de las reclamaciones de los tenedores de bonos que representan la deuda exterior de México. Por más que este Gobierno no ha sido parte de estas negociaciones, tuve noticia con satisfacción de un

convenio posible entre los acreedores de México y el representante de las autoridades mexicanas que tomó parte en las negociaciones.

"Sin embargo, entendemos que no se ha llegado al acuerdo final, y que el Convenio espera la aprobación del General Obregón quien, según se ha manifestado públicamente, declaró que dicho Convenio habría también de ser ratificado por el Congreso Mexicano.

"(2) Entendemos también que ciudadanos norteamericanos, interesados en propiedades petroleras en México, han estado negociando con representantes de las autoridades mexicanas para llegar a una base mutuamente satisfactoria, sobre la cual aquellos quedarán protegidos en sus bienes y pudieran continuar desarrollándolos.

"Este Gobierno no ha tomado parte en las negociaciones, ni está preparado para discutir los méritos de proposiciones particulares; pero se complace ante la perspectiva de tal arreglo. Sin embargo, entendemos que no se ha celebrado todavía ningún convenio, y que cuanto se haya hecho está sujeto a la aprobación de las autoridades mexicanas.

"(3) No se han tomado todavía medidas adecuadas con objeto de confirmar, y asegurarles protección, los títulos válidos adquiridos por ciudadanos norteamericanos con anterioridad a la adopción de la Constitución de 1917.

"Aunque el señor Pani ha manifestado repetidas veces que el Congreso Mexicano está en libertad para regla

mentar la interpretación de esa Constitución, y que tiene autoridad exclusiva para este objeto, no se ha tomado aún medida alguna.

"(4) No he tenido oportunidad de examinar los textos de las cuatro decisiones de la Suprema Corte; pero si, como parece sobreentendido, continúa la decisión en el caso de Texas ya anunciado, con objeto de sentar un precedente compuesto de cinco decisiones sobre el mismo punto, son insuficientes para proteger los derechos norteamericanos de una aplicación retroactiva y confiscatoria de la Constitución mexicana.

"(5) Se han confiscado propiedades de ciudadanos norteamericanos, y hay amenazas de confiscación socorridor de "expropiaciones" sin proveer la justa compensación.

Así, pues, aparece que el programa político y administrativo del General Obregón, invocado por el señor Pani, no ha alcanzado todavía una acción efectiva tal que pudiera considerarse como substituta satisfactoria de los compromisos obligatorios que he deseado para asegurar protección debida a los derechos de ciudadanos norteamericanos en México. Si el General Obregón considera contrario a la dignidad de México celebrar un Tratado que confirme y establezca de manera apropiada sus seguridades personales; más aún, si se alimenta firmemente la intención de respetar las obligaciones internacionales y asentar fuertes bases para intercambio amistoso, no acierto a compren

69

der por qué las autoridades mexicanas no han tomado esas medidas efectivas. Han tenido, y continúan teniéndola, amplia libertad para obtener los resultados apetecidos.-

"Debo nuevamente hacer hincapie en el punto, - declarado en público hace tiempo, que este Gobierno no - tiene deseo alguno de impedir el camino de una legisla-- ción no confiscatoria que México tenga a bien promulgar dentro de la competencia de su autoridad doméstica. Si dicha legislación es de naturaleza inhospitalaria para - inversiones BONA FIDE de ciudadanos pertenecientes a -- otro país que no sea México, será una consecuencia de la la mentarse; pero no se prestará a objeciones sobre la base de violación de compromisos internacionales. El punto - radica en derechos válidos ya adquiridos. Este Gobierno abriga los sentimientos más amistosos hacia el pueblo de México y el deseo más sincero de estimular su prosperidad por medio de cooperación adecuada. Sin embargo, con ob- jeto de que se mantenga este intercambio amistoso, es ma nifiestamente importante que no se cuestione la seguri-- dad de títulos válidos adquiridos por ciudadanos nortea- mericanos de acuerdo con las leyes mexicanas según exis- tían en la época de la adquisición, y que, si México de- sea expropiar cualesquier bienes poseídos válidamente, - debiera otorgar compensación equitativa y razonable. Es tos se consideran como los fundamentos de relaciones pro

vechosas y amigables, y esperamos que las autoridades mexicanas consideren factible el otorgar, de manera apropiada, las seguridades razonables que este Gobierno ha pedido."

Final de la controversia cansilleresca.

La siguiente carta del Secretario de Relaciones que suscribe al Encargado de Negocios de los Estados Unidos marca, por ahora, el punto final de la controversia - entre las dos Cancillerías:

"México, 31 de marzo de 1923.

"Señor George T. Summerlin,

"Embajada Americana.

"Presente.

"Muy estimado señor Summerlin:

"Por acuerdo del señor Presidente de la República, tengo el honor de contestar la carta de usted fechada el 3 de agosto del año próximo pasado y acompañada de la copia fiel de una nota de instrucciones que le dirigió el señor Secretario de Estado de Washington, en relación con mis cartas del 4 y 24 de mayo del mismo año.

Complace a este Gobierno que de dicho pliego de instrucciones haya surgido la posibilidad de un ventajoso cambio de ruta, abandonando la escabrosa y cerrada de la firma de un Tratado de Amistad y Comercio —que, como condición ineludible para otorgar el reconocimiento al ac

71

tual Gobierno de México, lesionaba la soberanía y la dignidad nacionales— para entrar al camino llano y abierto de un adecuado desarrollo del programa gubernamental mexicano, que ha contenido y contiene el propósito de respetar los derechos legalmente adquiridos antes de la fecha en que fué promulgada la Constitución de 1917. A pesar de que el presente Gobierno de México, desde su inauguración, ha dado continuadas pruebas de capacidad para realizar tal programa, como el balance de su gestión política, cuando envió usted la carta que ahora contesto, no fué considerado satisfactorio, bajo ese aspecto, por la Cancillería Americana —aunque sí para volver su actitud, manteniendo todo lo que en ella se ha conceptuado esencial, compatible con la única que, no obstante sus grandes deseos de llegar pronto a un avenimiento, ha podido asumir decorosamente la Cancillería Mexicana— el señor Presidente Obregón, respetando el derecho ajeno de juzgar libremente los resultados de su actuación oficial y esperando, confiado en la cooperación de los otros Poderes Federales y en el apoyo de la opinión pública, la fuerte evidencia de otros hechos que pronto tendrían que sumarse a su balance político, decidió aplazar esta contestación.

"De entonces a la fecha, en efecto, el Gobierno de México ha ejecutado actos de importancia tal en la realización de su programa, que tendrán que influir ventajosamente —dada la buena disposición manifestada por ambas partes— en la solución del problema de las relacio-

nes diplomáticas de los dos Gobiernos y ésto, sobre todo, si se humaniza un poco el criterio no puramente legal, si no también un tanto mercantilista con que, según parece, se ha mirado en el extranjero la complicada cuestión mexicana actual, desentendiéndose de sus profundas causas históricas determinantes y de los intereses del propio país.

"Para poder concretar el estado que guarda ahora la situación internacional mexicano-americana, habrá que hacer un examen somero de los cinco puntos que comprenden el resumen final de la mencionada nota de instrucciones del Departamento de Estado de Washington y que, en agosto del año pasado, dicho Departamento presentaba como obstáculos que impedían la normalización de las relaciones diplomáticas entre los dos Gobiernos, a saber:

"El primer punto es el que se refiere al Convenio de reanudación del pago de intereses y amortización —suspendido desde el año de 1914— de la Deuda Exterior, pactado en New York entre el Secretario de Hacienda de México y el Comité Internacional de Banqueros. Este Convenio estipula garantías enteramente satisfactorias para los tenedores —en su mayoría americanos— de los bonos, cuyo valor monta a la crecida suma de mil cuatrocientos millones de pesos; comprende, además, la devolución de los Ferrocarriles Nacionales de México a la Compañía propietaria —de la que también son americanos los principales obligacionistas— y ha sido ratificado tanto por el señor Presidente de la República como por el H. Congreso

de la Unión y, por consecuencia, está ya en pleno vigor y ejecución. Este obstáculo, por tanto, ha desaparecido.

"El segundo punto se relaciona con las negociaciones iniciadas, también en New York, entre el mismo Secretario de Hacienda y los representantes de las principales empresas interesadas en la explotación de la riqueza petrolera mexicana. Estas negociaciones tendían a una forma especial de reorganización financiera de esas empresas, que garantizara —independientemente de la legislación respectiva— sus derechos y que facilitara el desarrollo posterior de sus intereses. El Convenio correspondiente, que no llegó a ultimarse, constituiría —desde el solo punto de vista de las garantías demandadas— una innecesaria protección adicional a la que otorgará la futura Ley Orgánica del artículo 27 de la Constitución. La falta, pues, de este Convenio no implica necesariamente ausencia de seguridades para los derechos petroleros anteriores a 1917, ni puede constituir, por tal motivo, un obstáculo o dificultad internacional.

"El tercer punto trata de la protección a los títulos adquiridos legalmente por ciudadanos americanos antes de que fuera promulgada la Constitución de 1917. Esta cuestión también quedará resuelta con la futura Ley Orgánica del artículo 27 constitucional.

"El cuarto punto habla de las ejecutorias que ha dictado la Suprema Corte de Justicia de la Nación en

cinco casos de amparo de Compañías Petroleras contra el -
Presidente de la República y el Secretario de Industria y
Comercio, por actos de aplicación retroactiva del artícu-
lo 27 constitucional, presumiendo que dichas ejecutorias -
sean insuficientes para proteger todos los derechos que -
los ciudadanos americanos hubieren adquirido en México an-
tes del año de 1917. La Corte, naturalmente, limitó sus
resoluciones a los casos concretos que las motivaron y, ba-
jo este aspecto, el resultado no podía ser más favorable
a las Compañías interesadas, ya que, además de quedar de-
bidamente amparadas, el Considerando Segundo de las men-
cionadas ejecutorias —emanadas de la más alta Autoridad
en la materia— ha definido de modo inequívoco, como se -
verá después, el carácter no retroactivo del artículo 27 -
de la Constitución, en la parte relativa al petróleo. Es
te obstáculo, por consiguiente, también está allanado.

"El quinto punto, por último, se refiere a las
expropiaciones llevadas a cabo, sin indemnización, para -
las restituciones y dotaciones de ejidos.

"Pueden, por consiguiente, condensarse las cin-
co cuestiones consideradas en las líneas que anteceden -
—para su completa solución, desde el punto de vista ame-
ricano— en estas dos: la expedición de la Ley Orgánica
del artículo 27 constitucional y la indemnización de tie-
rras expropiadas.

"Examinemos separadamente estas dos cuestiones.

"Reglamentación del artículo 27 constitucional.-

Es obvio que la parte de este artículo que principalmente interesa al Gobierno de los Estados Unidos es la que se relaciona con la explotación del petróleo, tanto por lo que este producto significa como factor de desenvolvimiento industrial y, por tanto, de fuerza militar y naval, como por la enorme cuantía de capitales que los ciudadanos americanos han invertido o deseen aún invertir en dicha explotación.

"Hay que recordar, primeramente, el desarrollo casi fabuloso de la industria petrolera mexicana, durante los seis años transcurridos de régimen de nacionalización de los productos del subsuelo, restablecido por la Constitución de 1917. El año anterior a éste, en efecto, fueron extraídos 40.545,712 de barriles de petróleo, producción que aumentó en el espacio de tiempo mencionado, como sigue:

	Producción total.	Aumento respecto de 1926.
Año de 1917	- 55.292,770 barriles	- 14.747,058 barriles.
" "	1918 - 63.828,326	" - 23.282,614 "
" "	1919 - 87.072,954	" - 43.827,242 "
" "	1920 -157.068,678	" -116.522,966 "
" "	1921 -193.397,582	" -152.851,878 "
" "	1922 -182.278,457	" -141.732,745 "

"La producción mexicana de aceite mineral, según estas cifras, casi ha llegado a quintuplicarse respecto de

la máxima registrada antes de la vigencia de la presente -
 Constitución. Este hecho demuestra, de modo concluyente, -
 que el nuevo régimen constitucional no opone el más insigni-
 ficante estorbo al incremento de la explotación petrole-
 ra.

"Pero hay más todavía. La industria del petró-
 leo en México se estima actualmente en \$1050.532,434.00, -
 capital que se distribuye entre las diferentes nacionalidades
 interesadas, como sigue:

"Americana	- \$	606.043,239.00,	o sea el	57.7 %
Inglesa	- "	354.776,199.00,	" "	33.8 %
Holandesa	- "	71.197, 308.00	" "	6.7 %
Mexicana	- "	11.582,404.00,	" "	1.1 %
Diversas	- "	6.933,282.00,	" "	0.7 %

"Esto prueba, pues, que a las empresas extranjeras
 —y, entre ellas, a las americanas— corresponde la
 mayor prosperidad industrial y financiera realizada al am
 paro del régimen de nacionalización del subsuelo.

"Las cifras arriba consignadas se vuelven más -
 demostrativas aún de la absoluta falta de justificación -
 de los temores provocados en los petroleros —y, sobre -
 todo, los americanos— por los principios que sustenta -
 la nueva Constitución Mexicana, si se recuerda que el plan
 de reconstrucción nacional que sirvió de bandera al Gene--
 ral Obregón en la campaña electoral tendía a rectificar la

77

aplicación retroactiva que de dicha Constitución intentaba hacer, respecto de los derechos adquiridos sobre mantos petrolíferos, un Gobierno anterior reconocido por el de la Casa Blanca, propósito que el mismo General Obregón, como Presidente de la República, ha reiterado en numerosas declaraciones y realizado con actos tales como, por ejemplo, suspender la vigencia de Decretos, expedidos por aquel mismo Gobierno, que reglamentaban retroactivamente el artículo 27 constitucional y que fueron, precisamente, los que dieron lugar a los recursos de amparo interpuestos por las Compañías afectadas. A mayor abundamiento, estos amparos quedaron sin resolución mientras imperó el régimen que expidió dichos Decretos y, como una prueba de la actual cooperación, en tal respecto, de los otros Poderes Federales, la Suprema Corte de Justicia de la Nación —según he dicho ya— amparó a las Compañías afectadas y fijó el carácter no retroactivo del precepto constitucional de que se trata en cinco ejecutorias uniformes —para constituir un precedente jurídico— que, en la parte relativa, dicen así:

"Para que haya RETROACTIVIDAD en la Ley se requieren dos circunstancias: QUE OBRE SOBRE EL PASADO Y LO MUDE; Y QUE LESIONE DERECHOS ADQUIRIDOS BAJO EL AMPARO DE OTRAS LEYES ANTERIORES, por resultar esa nueva Ley en oposición con éstas. La última circunstancia, sobre todo, es esencial: cuando las leyes se relacionan con el pasa-

do, y esto no obstante, resultan inocentes en cuanto a derechos, por no vulnerar ninguno que hubiere sido anteriormente adquirido, entonces no existe realmente la retroactividad; no dan lugar a conflictos, no podrán dar motivo al amparo.

"Sentadas estas premisas, se impone examinar si el párrafo cuarto del artículo 27 de la vigente Constitución, que nacionaliza, entre otras substancias, el petróleo y todos los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos y gaseosos, es o no retroactivo. Es ineludible fijar el sentido de ese párrafo cuarto, porque si es retroactivo, deberán aplicarse también retroactivamente los Decretos impugnados que en él se apoyan, sin que obste el artículo 14 de la Constitución, y si no tiene ese carácter de retroactividad, entonces, esos Decretos son contrarios a dicho texto constitucional, y caen como dictados por el legislador común, bajo el imperio del mencionado artículo 14 de la novísima Ley Suprema."

"EL PARRAFO CUARTO DEL ARTICULO 27 DE LA CONSTITUCION ACTUAL NO PUEDE ESTIMARSE RETROACTIVO NI POR SU LETRA NI POR SU ESPIRITU, PUES NO VULNERA DERECHOS ADQUIRIDOS. No por su letra, porque no contiene el mandato expreso en el sentido de su retroactividad, ni esta se impone necesariamente de su redacción. No por su espíritu, porque resulta en concordancia con los otros artículos de la misma Constitución, que reconocen en general los antiguos principios en que descansan los derechos del hombre y les

otorgan amplias garantías, y porque teniéndole como no retroactivo, resulta también en armonía con los principios expuestos en los párrafos que inmediatamente le preceden y que tratan de la propiedad privada desde su origen, como partes integrantes del propio artículo 27 constitucional.-

"De todo esto se desprende que, conforme a las reglas universalmente aceptadas para la interpretación de las leyes y a la de una sana lógica, DEBE SENTARSE QUE ESE PARRAFO CUARTO DEL ARTICULO 27 DE NUESTRA ACTUAL CONSTITUCION NO ES RETROACTIVO, pues no lesiona derechos anteriores, legítimamente adquiridos. ESTE PRECEPTO ESTABLECE LA NACIONALIZACION DEL PETROLEO Y SUS DERIVADOS, a más de las otras substancias a que se refiere, ampliando la enumeración que hacen las anteriores leyes de Minería; PERO RESPECTANDO LOS DERECHOS ADQUIRIDOS LEGITIMAMENTE ANTES DEL PRIMERO DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS DIECISIETE, fecha en que se puso en vigor EN TODA SU INTEGRIDAD, la actual Constitución."

"Repito que este acuerdo perfecto en el sentido jurídico del artículo 27 constitucional respecto del petróleo no existe solamente entre los Poderes Ejecutivo y Judicial, sino que también se extiende al Legislativo, según lo ha declarado este Alto Cuerpo, en formas diversas y suficientemente claras, cada vez que se ha referido directa o indirectamente a la reglamentación de tal precepto. En estos últimos días ha vuelto la Cámara de Diputados a deba

80

tir un proyecto de Ley Orgánica formado por las Comisiones Parlamentarias respectivas, ha reiterado su criterio de -- irretroactividad y ha pedido al Secretario de Industria y Comercio que exponga el del Ejecutivo, habiendo coincidido ambos criterios de un modo absoluto. Además, el señor Presidente Obregón ha ratificado públicamente las declaraciones hechas por su Secretario ante la Cámara de Diputados.-

"Por otra parte, es preciso convenir en que la - tardanza habida en la expedición de la Ley Orgánica en -- cuestión, es atribuible, sobre todo, a causas ajenas al Gobierno de México y derivadas, por desgracia, de la misma - cuestión internacional. En efecto, como una de las características más salientes de la psicología política mexicana es la extraordinaria sensibilidad para todo lo que le-- sione o parezca lesionar la soberanía y la dignidad de la Nación, es claro que, en este respecto, la exigencia de la firma previa de un Tratado de Amistad y Comercio con estipulaciones conducentes a garantizar los derechos legítimamente adquiridos por los ciudadanos americanos en México,- como condición para reconocer a este Gobierno, y los incidentes correlativos de tal exigencia, han coartado induda-- blemente la libertad de los Poderes Ejecutivo y Legislati-- vo, cohibiéndolos, por poder aparecer entonces sus traba-- jos de formación de la mencionada Ley Orgánica, ante la - opinión pública, con el falso aspecto de obediencia servil a una presión extraña. Es obvio, pues, que ni esta invo--

luntaria y lamentable tardanza puede justificar la actual suspensión de las relaciones diplomáticas de los dos Gobiernos, no solamente porque el acto amistoso de su reanudación sería un factor eficiente de elaboración rápida y satisfactoria de la Ley Orgánica del artículo 27 de la Constitución, sino también porque, a falta de ella, la presente política gubernamental —como se ha demostrado ya— ampliamente sancionada por el más alto Tribunal de la República, lejos de afectar los derechos legalmente adquiridos antes de 1917 o de estorbar la creación de derechos nuevos, ha permitido un desarrollo asombroso de los intereses petroleros y, principalmente, de los de procedencia americana.

"Indemnización de tierras expropiadas.- En la nota de esta Cancillería del 24 de mayo de 1922, se hizo una larga exposición sobre el origen de la cuestión agraria mexicana, el dilatado y penoso desenvolvimiento de la aspiración popular por resolverla y las apremiantes circunstancias políticas que han concurrido en esta solución. Me limitaré, pues, ahora a recalcar, por una parte, el punto justificativo de mayor relieve en la correspondiente acción gubernamental y, por la otra, la pequeñez de los intereses agrícolas americanos afectados, ante los de otras nacionalidades, incluso la mexicana, y ante otros intereses, ya satisfechos, también americanos.

"Despojada de sus tierras por los conquistadores y encomenderos españoles, expoliada durante tres siglos de régimen colonial, carne de cañón durante otro si-

glo de luchas de independencia e intestinas y de tres guerras extranjeras —dos con Francia y una con los Estados Unidos— la pobre población indígena, como si no hubieren sido bastantes los padecimientos derivados de todas esas calamidades, sufrió también, tras el fraccionamiento de ejidos y bienes comunales provocado por la Constitución de 1857, las consecuencias de la total absorción de la pequeña propiedad, por el latifundismo que, de acuerdo con su inmoral política favorecedora de los POCOS DE ARRIBA a costa de los MUCHOS DE ABAJO, fomentó la oligarquía porfiriana. Nada tiene, pues, de extraño que la aspiración reivindicadora de tierras haya sido —como se ha dicho ya— la más vigorosa y persistente de cuantas conmovieron el alma popular mexicana durante la última revolución, al grado de traducirse en leyes radicales y de llevar el impulso revolucionario que la engendró más allá del período de la lucha armada, manteniendo encendidos numerosos focos de rebelión —justificada, de un lado, por amargos desencantos derivados de Gobiernos que, olvidando promesas hechas en el campo electoral, solían sujetar la política interior a las normas impuestas por el capital nacional o extranjero y, de otro lado, por la lentitud y vacilación que mostraron los anteriores Gobiernos surgidos de la revolución, en cuanto a reivindicaciones de tierras— hasta que la presente administración logró apagar dichos focos y restablecer la paz en todo el territorio nacional, más que mediante la fuerza militar y el derramamiento de sangre, por --

efecto de la pronta aplicación de las leyes agrarias. Nadie duda que, ante tal dilema, la solución adoptada fué - la más humanitaria y económica — a pesar de la inevitable lesión de algunos intereses agrícolas particulares na cionales y extranjeros— porque la represión por la fuerza, de resultados inciertos y transitorios, habría afecta do necesariamente los intereses agrícolas, urbanos, indus triales y morales de todo el país, con su eterno cortejo de males de toda índole. Este hecho innegable justifica suficientemente la precipitada acción que el Ejecutivo - Federal tuvo que realizar para restituir o dotar rápidamente de ejidos a los pueblos, tomando las tierras neces arias para ello de las Haciendas circunvecinas, aun aplazando la indemnización de las expropiaciones y afectando, por consiguiente, una parte de los intereses agrícolas na cionales y extranjeros de la República; pero en la proporción de las respectivas extensiones poseídas, es decir, - infinitamente más las propiedades mexicanas que las españolas, cuatro o cinco veces más éstas que las americanas, etc. Naturalmente, debido a la precipitación con que el Gobierno ha tenido necesidad de obrar, con el fin de estar seguro de obtener luego la pacificación general del - país y evitar los daños mayores y verdaderamente irreparables de la guerra civil, no pudo organizar eficientemente el personal relativo —hay que recordar, en este respecto, que la defectuosa organización administrativa es un -

mal del que adolecen aun algunos de los países más civilizados de la tierra y que este mal tuvo que agravarse en México por consecuencia de los últimos años de anarquía revolucionaria— y ante las ansias populares de tierras, largamente contenidas, el noble entusiasmo, casi explosivo, de algunos agraristas y las maquinaciones de los agitadores políticos que encontraron un campo propicio para desenvolverse, no fué posible, en muchas ocasiones, que la situación oficial se mantuviera dentro de la más estricta legalidad.

"El Ejecutivo Federal, que confiesa lo anterior con honradez y lo lamenta sinceramente, experimenta, en cambio, la satisfacción de haber restablecido la paz en todo el territorio nacional, de haber resuelto sus principales dificultades financieras, reanudando el servicio de la Deuda Pública, y de encontrarse ahora capacitado para proceder a la indemnización legal de las expropiaciones efectuadas —basada, como se sabe, en el valor que los mismos propietarios hubieren manifestado al Fisco, adicionado con el de las mejoras y un diez por ciento— y para continuar su actuación agraria, de la que sólo falta un mínimo esfuerzo en relación con lo que está ya consumado, por medios estrictamente apegados a las Leyes y suavizados por un amplio espíritu de conciliación. Al efecto, el señor Presidente Obregón convocó, a mediados del mes pasado, a todos los Procuradores de

Pueblos y Presidentes de las Comisiones Locales Agrarias - de toda la República, y, en la sesión inaugural de estos, - después de exponerles el objeto de su llamado y de expli-- carles la naturaleza de la legislación relativa, les reco-- mendó solemnemente que, al aplicar ésta, tuvieran a la vis-- ta los siguientes puntos:

"Primero.- Hacer honor a la representación ofi-- cial que se les ha confiado, demostrando el más alto respe-- to por las leyes y las autoridades en nombre de las cuales actúan.

"Segundo.- Que su papel de representantes de la Ley y de las autoridades incapacítalos para asumir el ca-- rácter de leaders políticos, porque no se trata ya de ser-- vir a un partido, ni de imponer un postulado, sino de cum-- plir fielmente con la Ley, que no es ya motivo de discu-- sión y

"Tercero.- Que en todos aquellos casos en que se opongan escollos para el cumplimiento de sus obligaciones, deben acudir en demanda de apoyo y consejo a las autoridades superiores que los han designado y, en ningún caso, so-- licitar ayuda de clubs políticos o grupos armados.

"El Ejecutivo de mi cargo --continuó el señor - Presidente-- ha demostrado ya un franco y firme propósito de velar por el cumplimiento de todas las leyes que rigen - al país, asumiendo toda la responsabilidad que reporta su actuación como gobernante; pero es necesario, además, que

"todos sus colaboradores se den completa cuenta de la parte que les corresponde de esa responsabilidad y procuren, dentro de su esfera de acción, ceñirse de tal manera al cumplimiento del deber y de la Ley, que puedan vanagloriarse de ello. Yo os encarezco, por tanto, que al volver a reanudar vuestras labores tengais presentes mis recomendaciones, procurando interpretarlas fielmente, para que vuestra colaboración armonice con la orientación que el Ejecutivo Federal anhela dar al desarrollo de tan importante precepto y podamos estar satisfechos de nuestra obra, sin ofrecer un solo blanco a las saetas de nuestros enemigos, a los que debemos siempre oponer, como barrera única, el imperio de la Ley."

"Considerando, en suma, todo lo que he expuesto respecto de los antecedentes del problema agrario mexicano, de las condiciones que han mediado en su resolución y de la forma en que necesariamente ha tenido que ser resuelto, en relación con los daños ocasionados a los propietarios agrícolas americanos; considerando también que estos daños han evitado otros mayores e irreparables, contribuyendo a la pacificación nacional; que los beneficios de este hecho —no los que reportarán todos los habitantes del país, sino solamente los que toquen a los mismos afectados por la política agraria— compensarán, con creces, los perjuicios producidos; que el Gobierno se propone —y tiene la posibilidad de realizar este propósito—

repararlos de acuerdo con la Ley y recordando, finalmente, la insignificancia de los intereses relativos —hasta ahora llegan a 26 las reclamaciones presentadas mientras que las españolas pasan de cien y las mexicanas son mucho mayores aún— en comparación con los de la Deuda Exterior, cuyo servicio ha sido ya restablecido, con los de la Compañía de los Ferrocarriles Nacionales de México, cuya devolución está ya pactada, y con los intereses petroleros que, a pesar de la aspereza con que fueron tratados por una Administración anterior reconocida por el Gobierno de la Casa Blanca, y del radicalismo que se atribuye a las disposiciones legales que los rigen, han crecido y prosperado, de modo extraordinario, bajo la protección ofrecida por el actual Gobierno de México; considerando todo eso, —repito— puede afirmarse que los daños en las propiedades agrícolas americanas, tanto por su extrema pequeñez como por haberlos ocasionado ineludibles e inaplazables necesidades mexicanas y vistos dichos daños —como dije al principio de esta carta— con criterio más humano que legalista, jamás podrán justificar la sistemática resistencia, digna de mejor causa, que el Gobierno de los Estados Unidos ha venido oponiendo a las corrientes de simpatía —sin precedente— en la Historia de los dos pueblos vecinos— creadas y desenvueltas al amparo de la buena voluntad del Gobierno de México y reveladas elocuentemente por las mociones, en favor de la inmediata reanudación de las relaciones diplomá-

88

ticas entre ambos Gobiernos, presentadas ante el Departamento de Estado de Washington por la mayoría de las legislaturas de los Estados de la Unión Americana y de muchas instituciones oficiales y privadas de aquel país.

"Me es grato, señor Summerlin, repetirme de usted atento amigo y seguro servidor.

A. J. Pani."

Estado actual de la situación.

Para dar una idea completa del estado en que ahora se encuentra la cuestión internacional mexicano-americana, nada mejor que la inserción de los siguientes documentos:

a) Carta del señor Presidente de la República al General James A. Ryan:

"México, 9 de abril de 1923.

"Honorable General James A. Ryan.- Presente.

"Muy estimado General Ryan:

"Me refiero a nuestra última conferencia relativa a la cuestión Internacional mexicano-americana, por la que se ha mostrado usted tan interesado, no solamente en su calidad de ciudadano de los Estados Unidos residente aquí y conocedor, por tanto, de la actual situación de México y de su Gobierno, sino también en la de amigo común del señor Presidente Harding y mío, conferencia en la --

cual me expresó usted la duda de que se llegara rápidamente a un acuerdo entre ambos Gobiernos si se continuaban -- como hasta ahora se ha hecho -- los lentos formalismos -- protocolarios de comunicación. En vista de esto me insinuó usted la conveniencia de que cada Ejecutivo nombrara representantes que, debidamente compenetrados con la política y las miras de aquellos, se pusieran en contacto directo para cambiar impresiones, durante un tiempo relativamente corto, y con el solo fin de informar luego a sus respectivos altos comitentes.

"He estudiado dicha sugestión y como el señor -- Presidente Harding simpatiza con la amigable proposición -- de usted, el Gobierno que presido también la aceptaría gustosamente, para demostrar, una vez más, su voluntad de cultivar con el Gobierno de la Casa Blanca los cordiales sentimientos de amistad que mutuamente se profesan los pueblos mexicano y americano. Así, pues, si el señor Presidente de los Estados Unidos nombrare dos comisionados para el objeto mencionado yo haría lo propio, en mi carácter de Presidente de esta República.

"Es ocioso que exprese a usted la satisfacción -- con que, llegado el caso, ofrecería a los comisionados americanos la hospitalidad de honor de esta ciudad, en la que, además, tendrían las mayores facilidades para sus trabajos y la mejor fuente de información. Es obvio que, por tal medio y en estas circunstancias, los Gobiernos respectivos

90

alcanzarían más fácilmente la completa posesión de la verdad, rectificando lamentables errores que han estorbado, - hasta ahora, su buena inteligencia y lograrían, con la máxima economía posible de tiempo y de trámites, un acercamiento real hacia la deseada normalización de sus relaciones diplomáticas.

"Mientras tanto, General, me es grato reiterar a usted las seguridades de mi consideración y afecto.

A. Obregón. "

Nota. En la carta original del señor Presidente de la República, el segundo párrafo comenzaba así: "He estudiado dicha sugestión y puesto que —según se ha servido usted comunicarme— los referidos Comisionados, en ningún caso, llegarían a discutir la legislación mexicana vigente, ni tocar el punto de procedencia o improcedencia de cualquier convenio previo a la reanudación de las relaciones diplomáticas entre los dos Gobiernos —condición rechazada desde un principio por la Cancillería Mexicana y abandonada ya por la Americana, según su nota del 3 de agosto del año pasado— y ya que, por otra parte, el señor Presidente Harding simpatiza con la amigable proposición de usted, el Gobierno que presido..."

Este párrafo fué modificado, substituyendo los renglones subrayados por la palabra "como" —tal como se ve en la carta preinserta— a súplica del General Ryan y

previas las seguridades que dió este señor, según dijo, debidamente autorizado, de que los Comisionados ajustarían su conducta a lo expresado en la parte suprimida .-

b) Traducción del Memorandum de la Embajada Americana:

"Se propone la siguiente declaración para ser publicada en la prensa en una fecha convenida, tan pronto como sea posible."

"Deseando evitar rumores prematuros, mediante una pronta declaración autorizada, el Departamento de Estado espera que la fecha convenida no pase del 22 de abril, bajo la inteligencia de que las autoridades mexicanas harán publicar una declaración idéntica en la prensa de la fecha fijada:

"A fin de llegar a una base mutuamente aceptable para el ajuste de las cuestiones fundamentales pendientes entre los Estados Unidos y México, serán designados dos Comisionados Americanos y dos Mexicanos, para reunirse con el propósito de considerar aquellas cuestiones y de referir sus conclusiones a las autoridades respectivas. Ha sido ofrecida la hospitalidad de la ciudad de México a los Comisionados Americanos, como huéspedes de honor, y la Comisión se reunirá allá. Los nombres de los Comisionados serán dados a conocer más tarde."

"México, D. F., 18 de abril de 1923."

c) Memorandum de la contra-proposición mexicana-

na:

"Para conservar estrictamente el espíritu del -
convenio preliminar informalmente concertado, se propone
el siguiente texto para la declaración idéntica que se ha
rá en las ciudades de México y de Washington:

"A fin de apresurar el logro de una mutua inte-
"ligencia entre los Gobiernos de México y de los Estados -
"Unidos, dos Comisionados Mexicanos y dos Americanos se--
"rán designados para reunirse con el propósito de cambiar
"impreciones y de referirlas a sus respectivas autorida--
"des. Ha sido ofrecida la ciudad de México a los Comisio
"nados Americanos, como huéspedes de honor, y la Comisión
"se reunirá en esta misma ciudad. Los nombres de los Co-
"misionados serán dados a conocer más tarde."

"México, D. F., 18 de abril de 1923."

d) Traducción de la Carta del Encargado de Ne
gocios de los Estados Unidos:

"México, 21 de abril de 1923.

"A S. E. Alberto J. Pani, etc., etc., etc.

"Presente.

"Mi querido señor Pani:

"Con referencia a la declaración idéntica, para
su simultánea publicación aquí y en Washington, propuesta
por usted en su Memorandum del 18 de abril de 1923, me -
honro en informarle que tengo instrucciones para declarar
informalmente que mi Gobierno acepta la declaración idén-

tica propuesta por usted, pero sujeta a la siguiente declaración explícita que —mi Gobierno agrega— no necesita ser publicada:

"No es el deseo del Departamento de Estado -- Crear ninguna dificultad respecto del mero uso de palabras cuando el intento es encontrar una base sólida y -- apropiada para la reanudación de las relaciones diplomáticas. Por otra parte, este mismo intento no debe ser -- considerado como cambiando el statu quo en el caso de -- que no llegara a alcanzarse una inteligencia mutuamente -- satisfactoria. Los Estados Unidos, por tanto, deben tener entendido que en los arreglos para la reunión de los Comisionados, en el uso de la expresión "los Gobiernos -- de los Estados Unidos y de México," en la idéntica declaración pública propuesta y en el proceso de las conferencias --que se espera de la naturaleza más amistosa por -- parte de los Comisionados Americanos-- los Estados Unidos no cambian su posición u otorgan el reconocimiento. -- Los Estados Unidos tomarán en consideración todas las -- cuestiones pendientes en el liberal espíritu de amistad, -- pero deben reservar su posición intacta hasta que se llegue a un entendimiento común. Por consiguiente, ni el -- nombramiento de los Comisionados, ni sus conferencias con los Comisionados Mexicanos, ni su intercambio de cortesías, deben tomarse como el reconocimiento del régimen que ahora funciona en México.

"Tengo instrucciones de telegrafiar la fecha con-
venida para la publicación de la declaración idéntica, con
el fin de que pueda hacerse simultáneamente en las ciuda--
des de Washington y de México."

"Tengo el honor de ser, mi querido señor Pani,-
de usted muy sinceramente,

George T. Summerlin."

e) Contestación, finalmente, del Secretario de -
Relaciones de México a la carta anterior:

"México, 21 de abril de 1923.

"Señor Jorge T. Summerlin,

"Embajada Americana. Ciudad.

"Muy estimado señor Summerlin:

"He mostrado su carta de esta fecha al señor -
Presidente de la República y, por encargo suyo, manifies-
to a usted que el Gobierno de México da una significación
idéntica a la sustentada por el Gobierno Americano al nom-
bramiento convenido de Comisionados Mexicanos y America--
nos, a la forma y términos de la declaración pública pro-
puesta y a la cordial secuela de las Conferencias respec-
tivas, pues nunca ha intentado ni creído que tales hechos,
por sí solos, pudieran implicar una nueva obligación para
alguno de los dos Gobiernos ni cambiar el estado actual -
de sus relaciones.

"Me encarga, además, el señor Presidente decir
a usted que está de acuerdo en que la publicación simul--

tánea de la mencionada declaración, se haga en las ciudades de México y de Washington en la prensa matinal del -- próximo día 24, y recordarle que las conferencias de los Comisionados --como ya se lo había indicado a usted verbalmente-- tendrán como base aquella declaración, el contenido de la carta del señor Presidente Obregón al señor General Ryan y las conversaciones de ambos que dieron origen a dicha carta.

"Me es grato, señor Summerlin, repetirme de usted atento amigo y seguro servidor,

A. J. Pani."

Los documentos preinsertos --que se explican --por sí solos-- al señalar el nuevo derrotero de las negociaciones tendientes a solucionar la complicada cuestión internacional mexicano-americana, mediante las pláticas --que próximamente se celebrarán en la ciudad de México los Comisionados nombrados por ambos Gobiernos, definen y limitan respectivamente, al propio tiempo, la naturaleza y el alcance de dichas pláticas.

México, 30 de abril de 1923.

El Secretario de Relaciones Exteriores,

ANEXO NUMERO 1.

TRATADO DE AMISTAD Y COMERCIO.

(Propuesto por el Gobierno Americano.)

---oOo---

Los Estados Unidos Americanos y los Estados Unidos Mexicanos deseando normalizar y promover el intercambio comercial entre los dos países y remover todas las causas de diferencia existentes entre ellos, han resuelto, con tal propósito, formalizar un Tratado de Amistad y Comercio, nombrando, a ese fin, como sus Plenipotenciarios:

El Presidente de los Estados Unidos Americanos,

.....
.....

y

El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, -

.....
.....

Quienes, después de haberse comunicado mutuamente los poderes amplios de que se hallan investidos, y encontrando que están en buena y debida forma, han acordado los siguientes Artículos.

ARTICULO I.

Los ciudadanos de cada uno de los Altos Poderes

Contratantes tendrán libertad de entrar, viajar y residir en los territorios del otro para atender a sus negocios; - ejercer sus profesiones; fomentar el comercio, mayoreo y menudeo; poseer o alquilar y ocupar casas, fábricas, almacenes y tiendas; emplear agentes a su elección; alquilar terreno para fines comerciales o de residencias, y, en general, hacer cualquier cosa incidental o necesaria para - el comercio en los mismos términos que los nativos, sometiéndose a las leyes y reglamentos allí establecidos.

Tendrán libre acceso a los tribunales de justicia, de acuerdo con las leyes sobre la materia, así como para la prosecución en lo que toca a la defensa de sus de rechos, en todos los grados de jurisdicción establecidos - por la ley.

No serán obligados, por ningún concepto, a pa- gar otros ni más altos derechos o impuestos que los que - pagan o puedan pagar los nativos.

Los ciudadanos de cada una de las Altas Partes Contratantes recibirán, en los territorios de la otra, la más constante protección y seguridad en sus personas y -- propiedades y disfrutarán, a este respecto, de los mismos derechos y privilegios otorgados o que puedan ser acorda- dos a los nativos, sometiéndose en todo a las condiciones impuestas a estos mismas.

Los derechos de propiedad, cualesquiera que sea su naturaleza, adquiridos con anterioridad o que se adquie

ran en lo sucesivo por ciudadanos de cualesquiera de los - dos países dentro de los territorios del otro, de conformi - dad con las leyes vigentes en ese lugar, por ningún motivo serán sujetos a confiscación, por preceptos constituciona - les, legislación o decretos del Ejecutivo o por cualquiera otra forma. El derecho de expropiación puede ser ejercido solamente por causa justificada de utilidad pública y no - se hará uso de él sin el debido proceso de ley, ni sin el pago inmediato de una justa compensación.

Teniendo en cuenta los principios establecidos - en el presente artículo y deseando definir claramente los derechos de propiedad de los ciudadanos americanos en Méxi - co, corporaciones, compañías, asociaciones e individuos, - incluyendo los derechos e intereses que pudieran tener en cualquier compañía , corporación o asociación, extranjera o nacional, y a fin de evitar toda mala inteligencia a ese - respecto, los Estados Unidos Mexicanos declaran que ni la Constitución de México puesta en vigor en 1º de mayo de - 1917, ni el Decreto de 6 de enero de 1915, al cual se re - fiere dicha Constitución, tienen efectos retroactivos en - su aplicación; que ni la mencionada Constitución ni el in - dicado Decreto, ni cualquier Decreto del Ejecutivo u orden militar o administrativa, ni cualquier ley federal o local que se hayan expedido o puesto en ejecución con anteriori - dad o para lo sucesivo, tienen o podrán tener efecto de - cancelar, destruir o perjudicar ningún derecho, título o -

interés en cualquier propiedad, cualquiera que fuese su -
naturaleza y donde quiera que estuviese situada y que, pre-
viamente a la vigencia de dicha Constitución y del citado
Decreto de 6 de enero de 1915, fué habida de acuerdo con
las leyes de México entonces existentes, expresas e inter-
pretadas; y que todas las tierras de cualquier carácter -
y todos los derechos e intereses comprendidos, y todas -
las propiedades de cualquier naturaleza y que de acuerdo
con las leyes de México existentes entonces, expresas o -
interpretadas, fueron adquiridas por ciudadanos america--
nos, corporaciones, compañías, asociaciones o individuos,
en la fecha de la promulgación de la mencionada Constitu-
ción, o en la fecha de expedición del indicado Decreto de
6 de enero de 1915, o hubiesen sido adquiridas por cual--
quier compañía, corporación o asociación extranjera o na-
cional, en la cual ellos estuvieren interesados, son y de-
berán ser garantizadas a dichos propietarios y a cualquier
concesionario o cesionario, por concesión o cesión hecha -
con anterioridad, o para lo sucesivo, sean o no los dichos
concesionarios o cesionarios ciudadanos mexicanos; y los
Estados Unidos Mexicanos reconocen que la propiedad de to-
das las materias descritas en el Código de Minas de los -
Estados Unidos Mexicanos de 1884 y las subsecuentes Leyes
Mineras de México de 1892 y 1909, respectivamente, en o -
bajo la superficie de las tierras en ese país, son pues--
tas en posesión de ciudadanos americanos, corporaciones, -

compañías, asociaciones o individuos que adquirieron títulos de propiedad sobre dichas tierras con anterioridad al 1º de mayo de 1917; los Estados Unidos Mexicanos reconocen, además, los derechos de todos los ciudadanos americanos, - corporaciones, compañías, asociaciones e individuos, sobre tales materias o derechos comprendidos en ellas o con respecto a ellas por los documentos de cesión o concesión que poseen extendidos por el Gobierno Mexicano, ciudadanos mexicanos o por cualquiera otra persona que hubiese adquirido la propiedad de dichas tierras o derechos con anterioridad al 1º de mayo de 1917; y los Estados Unidos Mexicanos se comprometen:

(a) a restituir a los ciudadanos americanos, corporaciones, compañías o individuos, las propiedades, derechos o intereses de que hubiesen sido privados en México - desde el 1º de enero de 1910, sin justa compensación;

(b) a indemnizarlos por daños o perjuicios infligidos en sus propiedades, derechos o intereses, incluyendo cualquier compañía o asociación en la cual esté interesados, como resultado de tal pérdida;

(c) a indemnizarlos equitativamente por las propiedades, derechos o intereses de que hubiesen sido desposeídos y que sea imposible restituir.

ARTICULO II.

Los ciudadanos de cada una de las Altas Partes - Contratantes no serán estorbados, perseguidos ni vejados -

en ninguna forma, a causa de sus creencias religiosas, ni en el propio ejercicio de su culto respectivo, ya sea dentro de sus mismas casas o en sus propias iglesias o capillas, las cuales ellos estarán en libertad de construir y sostener, en situación conveniente, no mezclándose de ninguna manera sino respetando la religión y costumbres del país en el cual residen.

Los ciudadanos de los Estados Unidos en México tendrán y disfrutarán del derecho de ocuparse en el culto religioso y en cualquier otra actividad relativa a la religión y educación, de la misma manera que los ciudadanos de México lo hacen en los Estados Unidos.

ARTICULO III.

Las residencias, almacenes, fábricas y tiendas de los ciudadanos de cada una de las Altas Partes Contratantes en los territorios de la otra, y todos los terrenos relativos empleados para fines comerciales o de residencia, serán respetados. No será permitido proceder a efectuar visitas domiciliarias o registrar ninguno de dichos edificios o terrenos, o examinar o inspeccionar los libros, papeles o cuentas, excepto bajo las condiciones y en la forma prescrita por las leyes, ordenanzas y reglamentos expedidos para los nacionales.

ARTICULO IV.

Habr^á entre los territorios de las dos Altas Par

tes Contratantes recíproca libertad de comercio y navegación. Los ciudadanos de cada una de las Altas Partes Contratantes, de la misma manera que los ciudadanos o súbditos de la nación más favorecida, tendrán libertad de dirigirse libremente con sus barcos y cargamentos a cualquier lugar, puerto y río, en los territorios de la otra y que están o puedan ser abiertos al comercio extranjero.

ARTICULO V.

No se impondrán otros ni más altos derechos sobre la importación dentro de los territorios de cualesquiera de las dos Altas Partes Contratantes de cualquier artículo de la producción o manufactura de los territorios de ellas que sean o puedan ser pagados sobre el mismo artículo de cualquiera otra nación extranjera; ni se impondrán tampoco otros ni más altos derechos o impuestos en los territorios de cualquiera de las Partes Contratantes sobre la exportación de cualquier artículo de los territorios de la otra, tales como los que son o puedan ser pagados sobre la exportación de artículo igual a cualquier otro país extranjero; ni tampoco podrá imponerse ninguna prohibición a la importación o exportación de cualquier artículo de la producción o manufactura de los territorios de cualquiera de las Partes Contratantes a o de los territorios de la otra, que no se extienda también a igual artículo de cualquier otro país extranjero.

La prohibición anterior no es, sin embargo, aplicable a las prohibiciones o restricciones mantenidas o impuestas como medidas de sanidad o con el fin de proteger a los animales y plantas útiles.

ARTICULO VI.

Los ciudadanos de cada una de las Altas Partes Contratantes disfrutará en los territorios de la otra, exención de todo impuesto por tránsito y perfecta igualdad de tratamiento en todo lo que se relacione con almacenamiento, concesiones, facilidades y descuentos.

ARTICULO VII.

Barcos mercantes que naveguen bajo la bandera de los Estados Unidos o de México, llevando los papeles requeridos por sus respectivas leyes nacionales a fin de comprobar su nacionalidad, serán considerados en México y en los Estados Unidos como barcos de los Estados Unidos o de México, respectivamente.

ARTICULO VIII.

Ningún derecho sobre tonelaje, puerto, pilotaje, faros, cuarentena, u otros derechos similares o correspondientes de cualquier denominación, impuestos en nombre o para provecho del Gobierno, funcionarios públicos, particulares, corporaciones o establecimientos de cualquier clase, serán impuestos en los puertos de los territorios -

de cualquiera de los dos países a los barcos del otro, - que no sean de la misma manera y en iguales condiciones - cargados a los barcos nacionales en general, o a los barcos de la nación más favorecida. Tal igualdad de tratamiento se aplicará recíprocamente a los barcos respectivos cualquiera que sea el punto de donde ellos vengán y el de su destino.

ARTICULO IX.

El comercio de cabotaje de las Altas Partes Contratantes está exceptuado de las provisiones del presente Tratado y será reglamentado de acuerdo con las leyes de - los Estados Unidos y México, respectivamente. Queda en--tendido, sin embargo, que los ciudadanos de cualesquiera de las Partes Contratantes disfrutará a este respecto -- del tratamiento otorgado a la nación más favorecida en - los territorios de la otra.

Un barco de una de las Partes Contratantes, cargado en país extranjero con carga destinada a dos o más - puertos de entrada en los territorios de la otra, puede - descargar parte de su cargamento en uno de dichos puertos, y, continuando su viaje al otro puerto o puertos de destino, descargar allí el resto de su cargamento, sujeto siem- pre a las leyes, tarifas y reglamentos de aduanas del país de destino; y, de igual manera y con la misma salvedad se les permitirá a los barcos de una de las Partes Contratan-

tes cargar en diferentes puertos de la otra en los mismos viajes de regreso.

ARTICULO X.

Excepción hecha de lo expresamente previsto en otra parte de este Tratado, las Altas Partes Contratantes están de acuerdo que en todo lo que concierna a comercio y navegación, cualquier privilegio, gracia o inmunidad que cualesquiera de las Partes Contratantes tenga actualmente concedido, o pueda en lo de adelante otorgar a los ciudadanos de cualquier otro Estado, deberá ser extendido a los ciudadanos de la otra Parte Contratante gratuitamente, si la concesión en favor de aquel otro Estado estuviese acordada en la misma forma, y en iguales o equivalentes condiciones si es que la concesión hubiese sido condicional.

ARTICULO XI.

Cada una de las Altas Partes Contratantes puede designar cónsules generales, cónsules, vicecónsules y otros empleados o agentes consulares, con residencia en las ciudades y puertos de los territorios y posesiones de la otra donde a iguales funcionarios de otros poderes se les permita residir.

Tales funcionarios y agentes consulares, sin embargo, no deberán entrar en funciones hasta haber sido aprobados y admitidos por el Gobierno al cual hayan sido enviados.

Estarán autorizados a ejercer todos sus poderes y disfrutar todos los honores, privilegios, exenciones e inmunidades de todas clases que son o puedan ser acordadas a los funcionarios consulares de la nación más favorecida.

ARTICULO XII.

En caso de muerte de cualquier ciudadano de México en los Estados Unidos o de cualquier ciudadano de los Estados Unidos en México sin dejar en el país de su defunción ningún heredero conocido o ejecutores testamentarios nombrados por él, las autoridades legales competentes deberán informar en seguida al más cercano funcionario consular de la nación a la cual pertenecía el finado, a fin de que la necesaria información pueda ser inmediatamente dirigida a las partes interesadas.

En el caso de que cualquier ciudadano de cualquiera de las Altas Partes Contratantes muera intestado en el territorio de la otra Parte Contratante, el Cónsul General, Cónsul, Vicecónsul u otro funcionario o agente consular de la nación a la cual el finado pertenecía, o, en su ausencia, el representante de dicho Cónsul General, Cónsul, Vicecónsul u otro funcionario y agente consular, hasta donde las leyes de cada país lo permitan y en tanto se hace la designación de albacea y mientras se otorgan las cartas de administración, se hará cargo de la propiedad personal dejada por el finado, para beneficio de sus

legítimos herederos y acreedores.

ARTICULO XIII.

Los ciudadanos de cada una de las Altas Partes -
Contratantes gozarán en los territorios de la otra igual -
protección que la concedida a los nativos con relación a -
patentes, marcas de fábrica y diseños, previo cumplimiento
de las formalidades prescritas por la ley.

ARTICULO XIV.

Los Estados Unidos Mexicanos reconocen su respon-
sabilidad pecuniaria por todos los daños ocasionados por -
muerte o lesiones a personas, o daños en o destrucción de,
propiedad de ciudadanos americanos, corporaciones, compa--
ñías, asociaciones o individuos, ya sea que dichos daños -
hubiesen sido ocasionados por actos de los representantes
de los Estados Unidos Mexicanos o por hechos de personas -
dedicadas al latrocinio o insurrección o revolución contra
el Gobierno Mexicano.

Las Altas Partes Contratantes se comprometen a -
efectuar, dentro de los seis meses siguientes a la fecha -
en que se firme el presente Tratado, una convención para -
el arreglo de todas las reclamaciones, por una parte, de -
corporaciones, compañías o individuos ciudadanos de los Es-
tados Unidos, por pérdida pecuniaria o daños, incluyendo -
pérdida o daño por perjuicios causados a cualquier compa--
ñía o asociación, extranjera o nacional, en las que estén

o hayan estado interesados, contra los Estados Unidos Mexi-
canos, y, por la otra parte, de todas las recl^{ma}aciones de
corporaciones, compañías o particulares, ciudadanos de Mé-
xico, por pérdida pecuniaria o daños, incluyendo pérdida o
daño por perjuicios causados a cualquier compañía o asocia-
ción en las que estén interesados, contra los Estados Uni-
dos.

ARTICULO XV.

Las Altas Partes Contratantes se comprometen a -
verificar dentro de los seis meses siguientes a la fecha -
en que se firme el presente Tratado, una nueva convención -
para el arreglo de las diferencias que hayan surgido entre
ellas con relación al título internacional de la llamada zo-
na del Chamizal, tópicó que fué de la Convención de 24 de
junio de 1910 y del protocolo suplementario de 5 de diciem-
bre de 1910. Con este propósito reanudarán las negociacio-
nes en el mismo punto en que fueron interrumpidas el mes -
de marzo de 1913.

ARTICULO XVI.

Las Altas Partes Contratantes acuerdan que den--
tro de los seis meses siguientes a la fecha del cambio de
ratificaciones del presente Tratado, designarán una Comi--
sión compuesta de un comisionado nombrado por cada Parte -
que deberá sin dilación proceder al estudio de las cuestio-
nes relativas a la equitativa distribución de las aguas li

mitrofes. Esta Comisión deberá, en el término de un año, a partir de la fecha de su organización, someter a los Gobiernos respectivos un informe con sugerencias que servirán de base para futuras negociaciones sobre la materia.-

ARTICULO XVII.

El presente Tratado deberá permanecer en vigor por el término de seis años a partir de la fecha del cambio de ratificaciones, y si seis meses antes de la expiración de dicho plazo ninguna de las Partes hubiese notificado a la otra de su intención de reformar alguno o todos los Artículos del Tratado, o de impedir su acción, deberá seguir en vigor hasta seis meses después de la fecha en que una de las Partes notifique a la otra de su intención de proceder a reformarlo o terminarlo; en la inteligencia, sin embargo, de que la terminación de este Tratado, según lo previsto anteriormente en su texto, no deberá afectar ningunos derechos de propiedad reconocidos por el mismo o que puedan haber sido adquiridos previamente a tal conclusión.

ARTICULO XVIII.

El presente Tratado deberá ser ratificado por las Altas Partes Contratantes de acuerdo con sus respectivas Constituciones. Las ratificaciones de este Tratado deberán ser cambiadas en Washington, a la mayor brevedad posible, y será puesto en vigor en la fecha del cambio de ra

tificaciones.

En testimonio de lo cual, han firmado este Tra
tado y fijado al mismo sus sellos los respectivos Pleni-
potenciarios.

Dado por duplicado en _____, a los _____
días del mes de _____ de 1921.